

Colombia: de la paz como ficción a la paz real

José Gregorio Kakoma*



a liberación de una persona que ha estado secuestrada es un hecho que hay que celebrar. Recobrar la libertad personal es *volver a nacer* y a nivel social es una señal que ayuda a recuperar la confianza en la convivencia. Pero la liberación de un grupo de secuestrados en manos de las FARC no debe leerse como el fin de la industria del secuestro y mucho menos como el advenimiento de la paz social. Las cosas son más complejas. Recordemos que en Colombia los casi 700 secuestrados en poder de las FARC sólo representan un 25 por ciento del total de las víctimas de este inhumano flagelo.

La espectacular liberación de Ingrid Betancourt ha puesto a Colombia en la agenda de los medios de comunicación nacional e internacional, y ha generado ficciones que maximizadas pueden ser perversas de cara a la construcción de una auténtica paz en Colombia. Esta liberación, como las anteriores, evidencia

Tales son los niveles de rechazo de la guerrilla que esta estrategia ha sido avalada por una importante mayoría de la sociedad que, cansada de la violencia pareciera anhelar la seguridad a toda costa, incluso hasta recorrer los caminos ciegos y llegar a la paz como ficción.

el drama inhumano del secuestro y, muy especialmente, la perversidad de la lógica guerrillista de las FARC de utilizar la vida humana de los civiles como recurso para chantajear al Estado y alcanzar sus objetivos; concreción perversa de *el fin justifica los medios*.

Este evento, concatenado a otros anteriores tales como el caso Emmanuel, la incursión militar unilateral de la fuerza pública colombiana a territorio ecuatoriano que concluyó con la masacre de 25 guerrilleros entre los que se encontraba Raúl Reyes, el ajusticiamiento de Iván Ríos por uno de sus subalternos al parecer comprado por la inteligencia militar, el manejo de la información de la muerte de Tiro Fijo por parte del gobierno antes de que el comando central insurgente lo hiciera público, la desertión y entrega de la temible Karina, la resistencia para volver a las filas de las FARC de algunos de los llamados canjeables que se encuentran detenidos; todo esto da cuenta de que las FARC viven una de sus peores crisis y que la inteligencia militar colombiana tiene infiltrado a este ejército irregular, el cual pareciera estar cada vez más reducido militarmente, fragmentado e incomunicado en su organización y dividido políticamente en su decisión de cómo resolver la crisis presente y afrontar su futuro: ¿negociar a tiempo?, ¿prolongar la guerra?, ¿rendirse?

Dado el estado en que se encuentran hoy las FARC es incuestionable que la política de Seguridad Democrática inscrita en el marco del Plan Colombia, en su componente contrainsurgente, ha mostrado resultados concretos que sumados con una estrategia mediática simplista en cuanto al análisis de las variables del conflicto, pero muy eficaz en su impacto hacia la opinión pública, ha colocado la popularidad del presidente Uribe rayando en un 90 por ciento y al borde de una tercera reelección, después de una cuestionada segunda reelección en la que gran parte de los miembros de los partidos que lo apoyaron se encuentran hoy presos o procesados por la justicia dada su vinculación con el narco-paramilitarismo, fenómeno que se conoce como *parapolítica*.

Este entramado de relaciones subterfugias entre el uribismo y el narco-paramilitarismo, contrastado con los datos del informe de mayo de 2008 de UNDC (Agencias de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito) que da cuenta de

un 27 por ciento de aumento en la producción de coca, nos indica que el Plan Colombia (PC) diseñado y justificado como un plan en contra del narcotráfico, a casi una década de implementación ha sido un fracaso ya que la producción y el tráfico de droga mantienen una línea ascendente contraria al 50 por ciento de reducción que se esperaba. Sin embargo, al contrastar las dos variables anteriores –narcoparapolítica y el resultado del informe de UNDC– con la reducción de las FARC, se pone en evidencia que en el contexto de post guerra fría en que se diseñó el Plan Colombia, el narcotráfico fue la bandera para articular una política contrainsurgente sistemática que esta siendo contundente en sus resultados. Esta política contrainsurgente se ha valido políticamente del narco-paramilitarismo y ha ido minando la institucionalidad democrática expresada en la Constitución del 91. Tales son los niveles de rechazo de la guerrilla que esta estrategia ha sido avalada por una importante mayoría de la sociedad que, cansada de la violencia pareciera anhelar la seguridad a toda costa, incluso hasta recorrer los caminos ciegos y llegar a la paz como ficción. Con razón, Ingrid Betancourt en una entrevista a BBC afirmó “sin FARC, no hay Uribe”, y el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, ha afirmado reiteradamente “las FARC, son el mayor enemigo de aquellos que buscamos una alternativa democrática distinta al uribismo.”

¿CÓMO PASAR DE LA PAZ COMO FICCIÓN A LA PAZ REAL?

Lo primero que hay que decir es que en Colombia la intolerancia de las elites económicas y políticas para reconocer la estructura injusta que excluye a una mayoría de la población y discrimina especialmente a las poblaciones indígenas y negras, ha ido configurando una doble moral en las relaciones sociales y políticas cuya máxima expresión es la para-institucionalidad. Las elites sólo creen en una institucionalidad que está al servicio de sus privilegios, y para mantener su *status quo* han recurrido a modos oscuros y pocos transparentes fuera de los marcos establecidos. Pongamos algunos ejemplos bien concretos que sirvan como hitos: en primer lugar, un caso emblemático en la historia de Colombia es el asesinato de Jorge Eliécer

Las comunidades indígenas y negras están siendo desplazadas por los grupos paramilitares cuya misión es desocupar las tierras para el desarrollo de los grandes megaproyectos ligados a corporaciones transnacionales.

Gaitán en 1948, un líder no tradicional que emergió dentro de las filas del Partido Liberal y que simbólicamente representaba la democratización intestina del partido y el acceso a los ámbitos del poder de un nuevo sujeto con un imaginario de inclusión social. Este sujeto emergente fue aniquilado y con él las esperanzas de una mayoría que veía en J.E.Gaitán el inicio de un proceso de reconfiguración de las relaciones políticas, sociales y económicas en el país. Este hecho desencadenó lo que se conoce como el periodo de la violencia.

En segundo lugar, el sistemático aniquilamiento de los militantes de la Unión Patriótica (UP), partido integrado en su mayoría por guerrilleros que se desmovilizaron en las negociaciones de paz que se dieron en la segunda mitad de los 80. En 1989 a la UP le asesinaron más de un militante por día. La Constituyente del 91, espacio donde se construyó la actual Constitución, fue una conquista política de las negociaciones de paz de finales de los 80. Un sector de extrema derecha, negado a repensar el Estado, vio en este acontecimiento una amenaza a sus intereses e inició una estrategia de exterminio que sacrificó a importantes líderes políticos y sociales; por su parte, la línea militarista de las guerrillas vio en este hecho el argumento para prolongar la guerra y negarse a negociar.

En tercer lugar, un hecho más actual es la situación que viven los indígenas

y negros en todo el territorio nacional pero muy especialmente en la zona del Pacífico. Recordemos que en la Constitución del 91 Colombia se reconoce como un país multiétnico y pluricultural, y las comunidades indígenas y negras logran que se les reconozca su territorialidad; sin embargo, dado que ésta abarca zonas de interés económico, las comunidades indígenas y negras están siendo desplazadas por los grupos paramilitares cuya misión es desocupar las tierras para el desarrollo de los grandes megaproyectos ligados a corporaciones transnacionales. Estos hitos muestran que para que haya paz en Colombia, es condición necesaria la superación de la intolerancia que da origen a una doble moral que se expresa en la para institucionalidad cuya manifestación más patente es el paramilitarismo y la paraparlítica.

La intolerancia de los grupos guerrilleros de izquierda les ha llevado a mantener, bajo la mampara de la resistencia armada, una guerra prolongada que les ha ido convirtiendo en actores violadores de derechos humanos y del derecho humanitario internacional al punto de ser identificados por sectores importantes de la sociedad y el Estado como grupos terroristas e incluso como mafia organizada. Estos grupos parecieran estar aún convencidos de tomar el poder por la vía armada. En el caso de las FARC se pueden identificar en el tiempo algunos puntos de inflexión que dan cuenta de su progresiva degradación.

Este ejército irregular inicia sus actividades en el 64, en el contexto de la guerra fría, con clara identificación con el bloque comunista de cuya relación se nutría ideológicamente y del cual recibía apoyo militar, mientras contaba con un importante respaldo del campesinado. En la segunda mitad de los 80 a nivel nacional se inician los procesos de negociación y de paz y muchos guerrilleros se desmovilizan ingresando a la vida política nacional, mientras a nivel internacional se va desdibujando el escenario de la guerra fría hasta concluir con la caída del muro de Berlín y, en América Latina, con el fracaso de la revolución sandinista. El aniquilamiento de cientos de cuadros de los desmovilizados que conformaban la Unión Patriótica sirvió como argumento para continuar con la lucha armada y descartar la vía negociada. Al no contar con las alianzas internacionales se replantearon

Primera Ronda de Negociaciones Colombia - Triángulo Norte Centroamérica El Salvador, Guatemala, Honduras



Paramilitarismo y guerrilla representan las dos caras de un país dividido y negado a creer en una salida institucional y democrática.

Es cierto que hoy se puede viajar por las principales arterias viales del país de manera segura y este hecho impacta y crea una atmósfera de seguridad, pero recorrer las arterias de la participación política y social es riesgoso y coloca al ciudadano en un estado de alta vulnerabilidad al punto que puede llevarle a perder la vida.

la estrategia de financiamiento y comenzaron a valerse del secuestro, la extorsión y a pactar con el narcotráfico; este modo de proceder les fue llevando a fortalecer su aparato militar y a ganar poder, pero fueron perdiendo el respaldo del campesinado al convertirse en un actor de desplazamiento y violador de derechos humanos y del derecho humanitario al punto de ser identificados como grupo terrorista.

El fortalecimiento del militarismo en las FARC llevó al mismo tiempo a un replanteamiento de la estrategia paramilitar que dio origen en 1997, a la unión de todos los grupos de autodefensas consolidando las AUC, mientras se iban dando los pasos entre los gobiernos de USA y Colombia para la aplicación del Plan Colombia. Paramilitarismo y guerrilla representan las dos caras de un país dividido y negado a creer en una salida institucional y democrática. Sin embargo, la conversión en el discurso del Presidente de Venezuela sobre las FARC y la lucha armada, apoyado por Rafael Correa en Ecuador y Cristina Kirchner en Argentina, es bienvenida ya que puede forzar a las FARC a valorar la salida negociada; y por otra parte, las presiones y el énfasis en los derechos humanos que está exigiendo al gobierno colombiano un sector demócrata importante del Congreso de Estados Unidos, pudieran ayudar a la salida política.

En Colombia es importante repensar la seguridad democrática. La propuesta de Uribe, que tanto saldo político le ha dado, evidencia una inflación de la seguridad en detrimento de la institucionalidad democrática y de los derechos humanos. Esta seguridad democrática es gemela de la seguridad nacional y basta con ver los informes de la Comisión Colombiana de Juristas, Amnistía Internacional, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de DD.HH y Human Rights Watch, que dan cuenta de la sistemática violación a los derechos humanos, la persecución política y la impunidad estructural que coloca en un estado de alta vulnerabilidad a los líderes de los movimientos sociales, de derechos humanos y muy especialmente a los sindicalistas. Es cierto que hoy se puede viajar por las principales arterias viales del país de manera segura y este hecho impacta y crea una atmósfera de seguridad, pero recorrer las arterias de la partici-

pación política y social es riesgoso y coloca al ciudadano en un estado de alta vulnerabilidad al punto que puede llevarle a perder la vida. Para que haya paz real es necesaria una política de seguridad democrática que haga énfasis en la democracia con justicia social y no en la securitización que restringe los derechos y criminaliza la disidencia. La injusticia estructural, génesis del conflicto fratricida en Colombia, sigue intacta; y aunque parezca trillado decirlo, sin justicia no hay paz.

Este conflicto interno colombiano ha traspasado las fronteras, según el informe de junio de 2008, presentado en Londres por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Colombia es después de Sudán la segunda crisis humanitaria mundial, con tres millones de desplazados internos y alrededor de 650 mil refugiados en los países vecinos. No se puede seguir negando esta realidad porque lo que no es asumido no es redimido. Es necesario concertar acuerdos políticos y humanitarios orientados a una solución concertada entre los estados y las sociedades, que tenga como centro el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

* Defensor de Derechos Humanos.